

EL VUELCO POSTMODERNISTA

David Ibarra
10 de diciembre de 2004

México se incorporó con rasgos propios a la era del modernismo mundial con el triunfo de la Revolución Mexicana. A comienzos del siglo XX se pensaba con pasión en desterrar la opresión y la injusticia, crear una sociedad próspera y más libre. Con los pensadores de la Ilustración se creyó que la historia sigue una trayectoria progresista, universal, que el desarrollo sostenido es posible, así como la mejoría social y moral, apoyados, ambos, en los aportes de la ciencia y en la asociación armónica entre sociedad y Estado.

Así se inauguró la fase histórica de mayores logros sociales y económicos del país con una soberanía actuante, capaz de decidir sin obstáculos externos infranqueables los caminos del país. Los disturbios de la Primera y Segunda guerras mundiales abrieron espacios políticos y luego lo hizo el sistema internacional regido por las ideas keynesianas sobre la responsabilidad de los estados en procurar el empleo y el bienestar social. Un orden mundial formado por países soberanos y de fronteras semicerradas, dio amplia latitud de acción al estado mexicano para impulsar el desarrollo nacional sobre la base del proteccionismo y la creación de una economía mixta. La paz y el orden interno se cuidaron equilibrando y coordinando las relaciones distributivas y de poder entre los distintos grupos sociales con la mediación de un régimen presidencial autoritario, de partido hegemónico y un corporativismo obrero y empresarial.

Desde luego, no todas fueron ganancias, también estuvieron presentes costos que fueron acrecentándose con el tiempo. Las tentaciones proteccionistas y populistas, desajustaron las finanzas públicas, constriñeron la eficiencia

productiva. El impulso a la economía en nombre del progreso nacional, sacrificó la modernización política que fue incapaz de mejorar *pari passu* con el progreso económico. Las comunidades indígenas fueron tratadas --o maltratadas-- como si no tuvieran diferencias con el resto de los grupos sociales del país. Con todo, el golpe decisivo al régimen político y económico surgido de la Revolución estuvo dado por el imperativo de sumarse a los planteamientos posmodernistas que truncan el proyecto modernista de la Ilustración, a la par de hacer crítica demoledora de muchas ideas anteriores, como pone de relieve desde la muerte de los grandes relatos filosófico-racionalizadores, hasta la de las soberanías económicas nacionales.

En el ambiente político, las tesis posmodernistas han sustituido los ideales de la utopía socialista por un marcado énfasis esperanzador en el avance de la democracia liberal, dentro de cuyos alcances desafortunadamente suele excluirse la democratización de las decisiones económicas. Asimismo, la arena política actual deja de estar centrada en los debates sobre libertad, igualdad y desarrollo para todos y en todos los lugares. Estos objetivos se consideran deseables, pero el rasgo distintivo de las ideas contemporáneas es el subrayar la coexistencia de racionalidades distintas, de la pluralidad, de la otredad, de las mujeres, los grupos étnicos, los discapacitados, los homosexuales, los preocupados por la ecología, los países periféricos.

Por tanto, se atribuye importancia, nunca antes otorgada, a las diferencias culturales y a los derechos y percepciones de aquéllos usualmente excluidos del poder y del ejercicio de los derechos establecidos. De aquí que los movimientos en pro de los derechos humanos, de los feministas, del medio ambiente y de otros, ganen relevancia frente a los partidos políticos, los sindicatos o las burocracias públicas y privadas.

Al subrayar la presencia de diferencias de perspectiva e intereses entre los distintos grupos sociales o países y el respeto que en principio debieran otorgarse a las mismas, el postmodernismo pone en entredicho --como si fueren mitos insostenibles-- a las ideologías occidentales que tuvieron la pretensión de generar valores únicos, universales. Con ello, queda en tela de juicio la legitimidad de la representación ciudadana en los partidos políticos y en otras instituciones de la democracia liberal al dejar excluidos a numerosos grupos humanos. Se gana al desterrar racionalizaciones generalizantes, al incorporar la voz, los discursos, la cultura de los grupos segregados, pero se pierde al multiplicar los escollos a la formación de consensos legitimadores aceptables a todos.

En esencia, las posturas postmodernas perfeccionan, redondean, el ámbito de lo que podría calificarse de micropolítica, pero abandonan a su suerte el problema de concebir y legitimar la macropolítica de los acuerdos. De otro lado, sus contenidos emancipadores se encaminan preferentemente a crear libertades negativas --ausencia de coerción en el ejercicio de los derechos individuales--, pero al eludir o repudiar la formación de criterios y poderes unificadores, se abandona en alto grado el impulso a las libertades positivas, que reflejan la capacidad colectiva de los miembros de una sociedad de darse normas a sí mismos, de buscar el bien común, incluso limitando los derechos individuales. Se quiere oír la voz de los excluidos, darles derechos civiles pero se es reacio a ofrecer el amparo de los derechos positivos al eludir las vías de arribar a políticas de dimensiones colectivas más amplias. Las consecuencias son la disgregación de la política en torno a cuestiones parcializadas o singulares, mientras que los problemas generales de la pobreza, la marginación, quedan abandonados a su suerte al no abordarse ni presionarse en favor de estrategias asociadas a fortalecer los estados de bienestar.

En el caso de México, la disgregación macropolítica sigue precisamente esos derroteros y, además, se ve acentuada al transitarse --con el viejo y parchado armamento constitucional, sin reforma de Estado-- de un régimen presidencialista de partido hegemónico, a otro, multipartidista, sin mayorías definitivas en las cámaras legislativas, campo fértil al cabildeo de intereses segmentados. A ello se añade otro hecho: la apertura externa disuelve el paternalismo empresarial y obrero del signo corporativista, multiplicando los conflictos o amplificando el descuido de los grupos más débiles, por peor organizados. Y esto último, ocurre pasivamente, sin intentar la sustitución de las funciones coordinadoras del presidencialismo autoritario por instituciones democráticas de mediación política.

Como acaba de insinuarse, en materia económica ocurren también mudanzas enormes. La fuerza adquirida por las empresas transnacionales y los mercados sin fronteras está creando un sistema burocrático global casi inescapable. La ciencia ha mellado su fuerza liberadora, al ponerse más y más al servicio de la razón instrumental, de la razón que busca optimizar y satisfacer requerimientos mercantiles, sin parar mientes en el abandono de los problemas vivos de la humanidad: el hambre, la enfermedad, la destrucción ecológica. Las artes y la literatura, antes centro de crítica social, han sido convertidas en productos de mercado. Como se ve, el economicismo invade, coloniza, reductos antes independientes de la cultura, embotando su capacidad crítica.

Además, los paradigmas del nuevo orden internacional procuran estandarizar las políticas económicas de los países más allá del respeto a su historia, instituciones y cultura. La incorporación de México al postmodernismo de la globalización ha supuesto pagar altos derechos de admisión: ceder el liderazgo protagónico del Estado a la empresa privada nacional y sobre todo

extranjera; abrir los mercados a la competencia internacional y a los flujos foráneos de capital, aunque se destruya la industria vernácula; suprimir la mayoría de las normas del proteccionismo y con ellas las políticas de fomento industrial y de empleo; abrir espacios privilegiados a los inversionistas extranjeros como miembros destacados de la élite económica nacional.

En esencia, el impulso medular de la reforma económica postmoderna se endereza a la renuncia del intervencionismo microeconómico gubernamental, a suprimir las políticas industriales, a flexibilizar *de jure* o *de facto* el régimen laboral, independientemente de sus repercusiones sociales. En contraste, se abraza la más recia disciplina macroeconómica, enderezada no a satisfacer objetivos de desarrollo, sino a procurar a raja tabla propósitos estabilizadores, caros al funcionamiento de los mercados internacionales oligopolizados. Ahí está para probarlo, la independencia concedida al Banco Central --cuyo único objetivo es combatir la inflación--, o la búsqueda del más estricto equilibrio de las finanzas públicas --principio que no respetan los países avanzados-- con la renuencia consiguiente a seguir políticas contracíclicas de los ritmos de crecimiento económico. Sin duda, los enfoques descritos han servido a propósitos útiles: corregir desequilibrios financieros y fiscales, desterrar los peligros de la hiperinflación o del populismo. Sin embargo, suelen pasarse por alto las repercusiones negativas de esas políticas postmodernas sesgadas, poco innovadoras, en el desarrollo, la inversión, la creación de empleos, la equidad distributiva o la tranquilidad social.

El abandono de los productores, se manifiesta quiérase o no en una macroeconomía aparentemente sólida, pero socavada en sus bases microeconómicas. Así lo manifiestan desde la crisis bancaria de 1995 --que refleja la incapacidad de muchas empresas de resistir la competencia internacional y

servir sus créditos--, hasta el acrecentamiento desmesurado de las importaciones sustitutivas de la producción nacional, que impide cerrar los desajustes de la balanza de pagos y lleva a sacrificar el crecimiento del país. En esos términos, la estabilidad macroeconómica nos condena a un semiestancamiento crónico que deja insatisfechas las necesidades básicas de la sociedad y provoca el éxodo de la mano de obra calificada y no calificada al exterior.

El ascenso de las preocupaciones micropolíticas y la despreocupación microeconómica por empresas y trabajadores, abren el camino del desplazamiento de la política --otrota rectora indisputada de los grandes derroteros nacionales-- por una macroeconomía ademocrática; macroeconomía en nuestro caso, dispuesta a ceder soberanía o sacrificar --sin buscar combinaciones saludables-- el desarrollo o la justicia distributiva en aras de erradicar la inflación a la que se postula como el objetivo social supremo. La combinación de esas tendencias alimenta un sesgo conservador, deshumanizado, de las políticas públicas que socava simultáneamente a la naciente democracia nacional y al sistema económico que le sirve de sustento.